

0043/2024**I**

La figura de los traductores-intérpretes jurados, sin perjuicio de ser anterior a la norma que se va a citar, está regulada en la actualidad por la Disposición Adicional décima sexta (DA 16ª) (2) de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que dispone que:

Reglamentariamente se determinarán los requisitos para que las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tengan carácter oficial. En todo caso, tendrán este carácter las certificadas por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como las realizadas por quien se encuentre en posesión del título de traductor-intérprete jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los requisitos para el otorgamiento de este título, así como el resto de elementos que conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentariamente. El traductor-intérprete jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la traducción e interpretación.

Derivada de la anterior, se regla esta figura en el Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dispone, en relación a la materia que trata la Orden (regulación del uso de la firma electrónica para la certificación que han de realizar los traductores-intérpretes jurados), que una vez obtenido el título de Traductor Jurado o de Intérprete Jurado, (...) el ejercicio de la actividad quedará condicionado a la realización de los trámites de verificación de su firma y sello (art. 12). Y su art. 18 especifica que los Traductores Jurados y los Intérpretes Jurados certificarán con su *firma y sello* la fidelidad y exactitud de sus actuaciones; y el contenido del sello y la certificación deberán ajustarse, respectivamente, a los modelos que se indican en los anexos I y II de dicho reglamento. Pero prevé, a su vez, que los requisitos y especificaciones para el uso de la firma electrónica y, en su caso, del sello electrónico se establecerán mediante orden ministerial (art. 18.5).

Tal y como resulta del art. 1 del proyecto presentado, la Orden tiene objeto la regulación del uso de la firma para la certificación de los Traductores-Intérpretes Jurados, Traductores Jurados e Intérpretes Jurados.

Nos encontramos por tanto con unos tratamientos de datos personales, los que identifican al traductor-intérprete jurado, el idioma para cuya traducción oficial está habilitado, y su número de identificación en el Registro de Traductores Jurados e Intérpretes Jurados (véase art. 3.8 de la Orden) cuya base de legitimación cabe extraerla bien de lo dispuesto en el apartado c) o e) del art. 6.1 RGPD, ya sea porque el tratamiento de dichos datos es necesario, en cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, para verificar la validez de la traducción o interpretación realizada por los traductores o intérpretes jurados cuando ellos sea necesario para la determinación de la veracidad y/o carácter oficial de una traducción, bien porque la norma impone a los traductores la obligación legal de certificar con su firma y sello la fidelidad y exactitud de las traducciones o interpretaciones que realice, de manera que la ley otorga carácter oficial a las traducciones o interpretaciones para que puedan ser aportadas a actuaciones judiciales o administrativas y produzcan los efectos correspondientes a dicho carácter.

II

Dado que la modalidad de firma elegida por el proyecto de Orden para dicha identificación es la de la firma electrónica criptográfica basada en certificados electrónicos cualificados conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (Reglamento eIDAS), ello requiere asimismo el tratamiento de datos personales de los traductores e intérpretes jurados por los prestadores de servicios electrónicos de confianza, por lo que la Orden ha incluido en su art. 5 una mención a que los tratamientos de datos que precisen llevar a cabo estos se sujetarán a lo dispuesto “la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal”, lo cual, aun siendo correcto, se sugiere que se utilice una fórmula más concreta y específica, nombrando expresamente las normas que conforman dicha legislación de protección de datos, siguiendo lo dispuesto en el art. 13.3 del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aprobado por Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto, de manera que quedaría así:

El tratamiento de los datos personales que precisen los prestadores de servicios electrónicos de confianza para el desarrollo de su actividad y los órganos administrativos para el ejercicio de las funciones atribuidas por esta orden se sujetará a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de

protección de datos), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o a la normativa vigente en el momento relativa a la protección de datos de carácter personal

III

Esta Agencia desea llamar la atención adicionalmente sobre dos cuestiones.

La primera en el art. 4 de la Orden, cuando dispone que *El uso de la firma electrónica para fines no previstos en la presente orden podrá dar lugar a su revocación y a la exigencia de responsabilidades a la que haya lugar*

En primer lugar, no resulta claro del texto qué significa “utilizar la firma electrónica para *para fines no previstos* en la presente orden”, y eso porque la firma electrónica no es más que un medio de identificar, en este caso, a una persona física. Dicha persona física podrá utilizar, y sin duda lo hará, dicha firma electrónica para multitud de otras operaciones que requieran la verificación de su identidad, al igual que la firma manuscrita de la persona física se utilizará para muchas más finalidades que la de certificar textos traducidos. Por lo tanto, no se advierte cuál es aquí la finalidad que se trata de evitar, pero desde luego no parece que deba ser la utilización de la firma electrónica para otras finalidades adicionales.

En segundo lugar, a lo anterior se le añade una posibilidad de “revocación” [de la firma electrónica], cuando resulta que la Administración (no se dice claramente a quien corresponde la competencia para dicha “revocación” en el texto) no es quien “emite” u “otorga” dicha firma electrónica, ya que dicha función corresponde en el Reglamento eIDAS a los servicios de confianza (ver art. 3.16 del mismo), por lo que además esa revocación-sanción no aparece claramente determinada dado lo expuesto en el párrafo anterior.

IV

La segunda cuestión sobre la que se llama la atención reside en el segundo párrafo del art. 5 de la Orden, que dice, al referirse a la protección de datos personales:

Los prestadores de servicios electrónicos de confianza que consignen un pseudónimo en un certificado electrónico deberán constatar la

verdadera identidad del titular del certificado y conservar la documentación que la acredite.

A este respecto cabe comenzar resaltando que el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (Reglamento eIDAS) ha sido modificado, entre otras cuestiones, en materia de seudónimos, por el Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 910/2014 en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital. En concreto, ha modificado el art. 5 del Reglamento eIDAS, que ahora dice:

Artículo 5

Seudónimos en transacciones electrónicas

Sin perjuicio de las normas específicas del Derecho de la Unión o nacional que exijan a los usuarios identificarse o de los efectos jurídicos que el Derecho nacional contemple para los seudónimos, no se prohibirá la utilización de seudónimos escogidos por los usuarios.

Añade, por tanto, una prevención, que no existía antes en dicho precepto, a la posibilidad de utilización de seudónimos cuando las normas de los Estados miembros o el Derecho europeo “exigen” a los “usuarios” identificarse. Esta Agencia sugiere que por el redactor de la norma se revise si es este el caso, ya que tanto la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, en su DA 16ª, como el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, aprobado por Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto (art. 18), parecen establecer la necesidad o exigencia de que el traductor-intérprete jurado se identifique adecuadamente mediante su firma y sello, estableciéndose en todo caso un formato de sello que contiene la identificación del traductor-intérprete jurado, por lo que, en principio, no parecería posible la utilización de seudónimo ya que la norma aplicable exigiría la identificación.